México, diciembre de 1989, pp. 1050-1058

Crecimiento económico y corrientes financieras internacionales

Grupo Independiente sobre Corrientes Financieras a los Países en Desarrollo *

En el séptimo período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), celebrado en Ginebra en 1987, se acogió con beneplácito la propuesta del Gobierno de Japón de que se estableciera un grupo independiente de expertos "para examinar los medios de fomentar la corriente de recursos financieros hacia los países en desarrollo". Con el apoyo del secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, y a invitación de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, el Grupo Independiente sobre Corrientes Financieras a los Países en Desarrollo, que se constituyó en 1988, se reunió en Tokio y Washington, en abril y mayo de 1989.[1]

Durante los últimos cinco años la transferencia neta de fondos a los países en desarrollo ha sido negativa. Esta corriente inversa de recursos ha agravado considerablemente las críticas dificultades a que hacen frente muchos países en desarrollo y, en particular, los fuertemente endeudados y los menos adelantados. Aun presumiendo que nuestras propuestas fueran aceptadas y aplicadas rápidamente, pasarán varios años antes de que pueda invertirse el curso de esa corriente negativa y aumente de manera significativa el volumen de los fondos para las naciones en desarrollo. Teniendo en cuenta la desesperada situación de muchos países en desarrollo, es imperativo dar comienzo a esa tarea inmediatamente.

1. Integran el Grupo, Abdul Aziz Al-Quraishi (Arabia Saudita), Bernard T.G. Chidzero (Zimbabwe), Bernard Clappier (Francia), Janos Fekete (Hungría), Fritz Leutwiler (Suiza), Robert McNamara (Estados Unidos), Isamu Miyazaki (Japón), D.W. Nam (República de Corea), Olusegun Obasanjo (Nigeria), Lord Roll de Ipsden (Reino Unido), Jesús Silva Herzog (México), Pierre Elliott Trudeau (Canadá), Manuel Ulloa (Perú), Paul A. Volcker (Estados Unidos), Nitisastro Widjojo (Indonesia) y Helmut Schmidt (RFA).

* El 1 de junio de 1989, Helmut Schmidt, presidente del Grupo, dio a conocer el presente informe con el título de "Un mundo unido". La Redacción efectuó pequeños cambios editoriales y por razones de espacio excluyó los anexos.

Muchos de los dirigentes políticos de aquellas naciones han reconocido los errores que cometieron en el pasado y están tratando de corregirlos. Ha llegado el momento de que los dirigentes políticos y los banqueros de los países acreedores reconozcan también sus errores y tomen medidas correctivas. Hoy, más que nunca, los países en desarrollo necesitan ayuda.

Nuestras propuestas figuran en el apartado final de este trabajo; en los dos primeros se analiza brevemente la situación actual, incluida la de las corrientes de fondos, y se hace una descripción somera de la necesidad de adoptar un enfoque global para atender los complicados problemas de que se trata. Las atribuciones del Grupo excluían claramente la realización de un examen exhaustivo de los problemas interrelacionados del crecimiento de la población mundial, la pobreza, la desnutrición, el analfabetismo, la injusticia y la degradación del ambiente, que afligen a vastas regiones del mundo. Nuestras deliberaciones se concentraron, de manera serena y sin pretensiones, en las medidas que consideramos necesarias para aumentar el volumen de las corrientes financieras hacia los países en desarrollo. No tratamos de formular un plan maestro para un nuevo orden económico mundial. Tampoco estudiamos el problema de los cambios institucionales en la esfera financiera y monetaria como, por ejemplo, el del mejoramiento de la eficiencia, mediante su fusión, de las instituciones actuales, como el FMI y el Banco Mundial.

Nuestras propuestas tienen por objeto influir en los gobiernos y los encargados de la formulación de políticas de los países industrializados y en desarrollo, de las naciones con diferentes sistemas económicos y sociales y de las instituciones financieras internacionales. Les pedimos que evalúen nuestras propuestas y que luego tomen las medidas que correspondan. La puesta en práctica de nuestras sugerencias requerirá un alto grado de cooperación mundial que, a su vez, facilitará el diálogo entre el Norte y el Sur y lo robustecerá.

Hemos hecho estas propuestas en momentos en que se está produciendo un importante cambio estratégico en la relación entre las grandes potencias: Estados Unidos, la Unión Soviética y la Re-

pública Popular China. La normalización de sus relaciones abre el camino para que los recursos para gastos militares se reorienten a fines productivos y para que se integren a la economía mundial los países que todavía no forman parte de ella.

Además de expresar nuestro agradecimiento al Gobierno de Japón por el apoyo que ha prestado a nuestras reuniones, deseamos manifestar nuestra confianza en la capacidad y responsabilidad de ese país de aumentar, con su ejemplo, la corriente de fondos de los países industrializados hacia los países en desarrollo. Cada vez queda menos tiempo. Para invertir el actual curso de las corrientes financieras es crucial el liderazgo de Japón. La RFA, el otro país superavitario importante, debería hacer lo propio, al igual que el conjunto de países de la OCDE.

Los integrantes del Grupo Independiente proceden de muchas partes del mundo, con diferentes sistemas políticos, económicos y sociales. Sus 16 miembros han convenido en apoyar las conclusiones básicas del presente informe (cuando no su texto completo) y el mensaje fundamental de sus recomendaciones.

Necesidad de un enfoque mundial

A fines de siglo, 6 000 millones de personas compartirán un planeta acosado por problemas cada vez más agudos. No obstante, todavía no se atienden debidamente los relacionados con el crecimiento demográfico, la pobreza generalizada, el agravamiento de los riesgos para el ambiente (en particular, el peligro que plantean los posibles cambios del clima) y el creciente uso indebido de drogas.

Al mismo tiempo, la integración cada vez mayor de la economía mundial complica enormemente la evaluación y aplicación de las políticas económicas nacionales. Aunque rara vez se reconoce, las relaciones entre el comercio, la deuda, el crecimiento, las inversiones, las corrientes de capital, las tasas de interés y los tipos de cambio a menudo dominan la actividad económica. Las naciones continúan favoreciendo sus objetivos internos o, en el mejor de los casos, los objetivos políticos y económicos regionales, prefiriendo solucionar las crisis que adoptar medidas estratégicas a largo plazo, con lo que a menudo terminan sumando un riesgo apenas manejable a otro, y así sucesivamente.

En estas circunstancias, es obvia la necesidad de llegar a un consenso —una estrategia amplia— sobre un enfoque mundial de los problemas económicos, sociales y ambientales. Éste deberá reconocer el potencial de las economías de mercado y tener en cuenta las distintas necesidades de las naciones; pero también que en la economía mundial de la actualidad el éxito de cada nación depende del conjunto de naciones.

Aunque en el curso diario de la gestión política apenas si se reconoce la existencia de un mundo único, éste ya es una realidad. Hay sólo un mercado financiero mundial: un mercado de obligaciones, un mercado de crédito, un mercado internacional de monedas y un mercado de valores bursátiles, que funcionan las 24 horas.

Sin embargo, desde la ruptura del sistema de paridades fijas de Bretton Woods, la aparición de este mercado financiero mundial ha coincidido con fluctuaciones pronunciadas de los tipos de cambio, enormes déficit de los presupuestos nacionales, desequilibrios de las balanzas comerciales y de pagos en cuenta corriente y convulsiones de los mercados de valores.

En el contexto de tipos de cambio flotantes y, en parte, como resultado imprevisto de las dos alzas súbitas de los precios del petróleo en el decenio de los setenta, la deuda externa de varios países en desarrollo aumentó vertiginosamente, lo que precipitó una crisis financiera. Con la intensificación de ésta, el país con la economía más grande del mundo, Estados Unidos, pasó a ser el principal prestatario. Como consecuencia de esta situación, se ha invertido el flujo de recursos financieros. La corriente neta se dirige ahora de los países menos desarrollados a los industrializados y, dentro de la OCDE, a Estados Unidos.

A pesar de los esfuerzos que se han hecho para mantener en su modesto e insuficiente nivel la asistencia oficial para el desarrollo (AOD)[2] a los países menos avanzados, el PNB per cápita de muchos de éstos se ha reducido, exigiendo al máximo su capacidad de tolerancia, tanto en lo humano como en lo político. Así, la participación de los países en desarrollo en el mercado mundial disminuyó drásticamente y los términos de intercambio de sus productos básicos, con excepción de los del petróleo, alcanzaron los valores más bajos de los últimos decenios.

Durante los últimos 20 años las diferencias entre los países industrializados y los en desarrollo han aumentado enormemente. Entre 1965 y 1987, el PNB real per cápita, calculado en dólares de 1987, aumentó de 140 a 270 en los países de bajos ingresos, de 980 a 1 680 en los de medianos ingresos y de 8 820 a 14 550 en los industrializados con economía de mercado.

De mantenerse la situación actual, lo más probable es que esas diferencias crezcan todavía más en los próximos años.

A pesar de que los países industrializados han disfrutado de un período de crecimiento ininterrumpido y de que ha aumentado el volumen del comercio mundial, esos países no han carecido de problemas. Desde las dos alzas repentinas de los precios del petróleo, el crecimiento económico ha sido más lento y en muchos países industrializados ha habido prolongados períodos de desempleo alto, especialmente en Europa. El proteccionismo se está expandiendo y se cierne la amenaza de conflictos entre incipientes bloques comerciales. Además, la reciente preocupación por el resurgimiento de la inflación en el plano internacional ha creado mayor incertidumbre acerca de las perspectivas de crecimiento.

Los países de economía centralmente planificada (salvo China) también han experimentado tasas de crecimiento reducidas y, en su mayor parte, continúan fuera de la estructura y las prácticas de la economía mundial. El actual proceso de reajuste emprendido por las mayores naciones de este bloque y algunos de sus países aliados es un acontecimiento favorable.

Los problemas mencionados no se resolverán a menos que todas las naciones, trabajando en conjunto con un espíritu de auténtica cooperación internacional, aúnen sus esfuerzos a largo pla-

2. El Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE considera que la asistencia oficial para el desarrollo está compuesta de aportaciones o préstamos con un elemento de donación no inferior a 25%. Dicho elemento consiste en el grado en que las condiciones de los préstamos están debajo de las de mercado.

zo. A nuestro juicio esa cooperación podría abrir las puertas a un crecimiento económico mundial sostenible y, en particular, mejorar las condiciones de vida de los miembros más pobres de la comunidad de naciones.

Estructura actual de las corrientes financieras

Entre los países de la OCDE, las corrientes financieras de mayor envergadura en los últimos años se han dirigido de Japón y la RFA, las naciones con los superávit más grandes en cuenta corriente, a Estados Unidos, el principal país deficitario. A fines de 1988, Japón era el acreedor más importante en el plano internacional, con 300 000 millones de dólares a su favor, y Estados Unidos el principal deudor internacional, con una deuda estimada en 490 000 millones de dólares (ambas cifras incluyen la inversión extranjera).

Durante el último decenio, la tasa de ahorro de Estados Unidos ha sido reducida y su déficit presupuestario ha absorbido una proporción demasiado elevada de sus escasos ahorros. Ello ha contribuido al aumento de sus tasas de interés real, las cuales han estado por encima de las de la RFA y de Japón, y, en consecuencia, han encaminado a Estados Unidos el excedente de ahorros de esos países. Estas corrientes, debido a su inestabilidad y gran volumen, han intensificado las fluctuaciones de los tipos de cambio y agravado el riesgo de perturbaciones en los mercados financieros del mundo.

La absorción que Estados Unidos hace de la mayor parte del ahorro internacional y las elevadas tasas de interés se han sumado a los problemas de los países menos adelantados. La corriente de fondos a los países en desarrollo ha disminuido en un grado considerable, precisamente cuando ellos están soportando una pesada carga por el servicio de la deuda. Entre 1982 y 1988, el valor neto de los préstamos que obtuvieron del exterior descendió de 104 000 millones a 26 000 millones de dólares, en tanto que durante el mismo período las corrientes que no generan deuda (transferencias oficiales e inversiones directas)[3] aumentaron sólo 7 000 millones de dólares (de 27 000 a 34 000 millones de dólares). En algunos de los países en desarrollo la corriente de fondos ha sido negativa.

En Europa los países miembros del CAME también compiten por esos fondos. El empeoramiento de sus balanzas de pagos en cuenta corriente con los países de la OCDE los ha forzado a tomar en préstamo sumas cada vez más elevadas de monedas convertibles. De 1981 a 1987 la deuda externa pendiente de los países europeos del CAME aumentó de 95 000 millones a 130 000 millones de dólares (en parte debido a la apreciación del yen, el marco alemán y el franco suizo). Dos de ellos, Polonia y Rumania, tuvieron problemas para atender el servicio de la deuda, y uno, Polonia, los sigue experimentando. Hungría, Polonia y Yugoslavia se consideran países fuertemente endeudados, aunque Hungría siempre ha cumplido con sus compromisos.

En el pasado, los miembros de la OPEP,[4] en particular los cuatro países de altos ingresos (Arabia Saudita, Libia, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait), eran prestamistas netos de capital. Sin embargo, en 1987, al caer los precios del petróleo, sus superávit en cuenta corriente se transformaron en un déficit de 7 500 millones de dólares.

La distribución mundial de las inversiones directas es reflejo de la corriente total de capital. Así, Estados Unidos ha sido el principal receptor de inversiones extranjeras, absorbiendo una proporción desmesurada de la total de siete importantes países industrializados (Suecia, los Países Bajos, Francia, el Reino Unido, la RFA, Japón y Canadá). Desde 1980 esa proporción ha aumentado todavía más.

Durante el mismo período ha disminuido el volumen del flujo de inversiones de los países industrializados a las naciones en desarrollo. De 1982 a 1986 la corriente neta de inversiones directas a los países en desarrollo se redujo de 20 000 millones a 10 000 millones de dólares, aunque últimamente ha tenido cierto crecimiento. Sin embargo, las inversiones directas ya no se dirigen a América Latina sino a Asia, y las corrientes a África siguen siendo pequeñas e incluso están disminuyendo.

La mayoría de los países donantes no ha alcanzado todavía el objetivo establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2626 (XXV), del 24 de octubre de 1970, de destinar el 0.7% de su PNB a la AOD. El porcentaje medio de AOD de los países miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD)[5] es sólo la mitad de la cifra convenida (0.35% en el período 1986-1987), es decir, tan bajo como hace diez años. Sólo unas pocas naciones (Suecia, los Países Bajos, Dinamarca y Noruega) aportan una proporción significativamente superior a la asistencia; los dos países con las economías más ricas, Estados Unidos y Japón, proporcionan asistencia en un grado mucho menor (0.2 y 0.31 por ciento, respectivamente, en 1987). Durante el decenio de 1980 los miembros del CAME aumentaron significativamente su AOD en valores reales; sin embargo, el porcentaje de su PNB dedicado a la AOD es todavía muy inferior al promedio de la concedida por los países del CAD y su ayuda está dirigida sobre todo a las naciones menos desarrolladas del CAME. A pesar del empeoramiento de sus balanzas de pagos, los cuatro países exportadores de petróleo de altos ingresos proporcionaron un importante nivel de AOD a fines del decenio de los setenta y comienzos de los ochenta. Kuwait y Arabia Saudita continúan dedicando 1.2 y 3.4 por ciento (1987) de sus respectivos PNB a la ayuda oficial.

La mayor parte de la AOD está destinada a países de bajos ingresos (54% en 1987). El desglose por regiones muestra que África al Sur del Sáhara ha sido el principal receptor (31%), seguida por el Asia meridional (17%), otros países de Asia y Oceanía (21%),

3. Las transfererencias oficiales son los pagos de los gobiernos que no se traducen en la adquisición de bienes o servicios; por ejemplo, las donaciones de ayuda exterior, el socorro en casos de desastre, los subsidios a los presupuestos de la defensa, etc. Las inversiones extranjeras directas corresponden al valor en libros del capital social de los inversionistas directos en sus filiales en el extranjero y el valor de sus préstamos insolutos a éstas. Una filial de este tipo es una empresa comercial extranjera en la cual un solo inversionista es propietario como mínimo de 10% de las acciones con derecho de voto o su equivalente.

4. Constituida por trece países productores de petróleo: Arabia Saudita, Argelia, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Indonesia, Irán, Irak, Libia, Kuwait, Nigeria, Qatar y Venezuela.

5. Los miembros del CAD son Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, el Reino Unido, la RFA, Suecia, Suiza y la Comisión de las Comunidades Europeas.

América Latina (13%) y África del norte y el Medio Oriente (17%).[6] Sin embargo, en 1987 los países menos desarrollados en conjunto no recibieron más AOD en valores reales que en 1980. El aumento de la AOD proporcionada por miembros del CAD no ha compensado la disminución en la asistencia prestada por la OPEP.

Entre los países en desarrollo, los países del África al Sur del Sáhara enfrentan problemas singulares que requieren especial atención. Su PNB medio per cápita está disminuyendo y su crecimiento demográfico continúa aventajando al progreso económico y social. Además, mientras que 70% de su población depende de la tierra para subsistir, la erosión está muy extendida y aumenta a razón de 8 millones de hectáreas por año. La gran dependencia de las economías sudsaharianas de un único producto básico o de una gama limitada de bienes las pone en una situación más precaria que la de cualquier otro grupo de países, a la vez que aumenta su vulnerabilidad a las variaciones de los precios de los productos básicos y al deterioro de los términos de intercambio de estos productos.

África es un continente en crisis. Hay pocas razones para creer que los actuales programas de desarrollo puedan remediar esta situación.

Los países de bajos ingresos del África al Sur del Sáhara han contraído la mayor parte de su deuda a largo plazo con acreedores oficiales (85%). De 1980 a 1985, las corrientes netas de capital a la región se redujeron de 4 400 millones a 2 100 millones de dólares. En 1987 aumentaron a apenas más de 3 000 millones. No cabe esperar que la mayoría de esos países vaya a participar en los mercados financieros. La comunidad internacional ha reconocido que es preciso condonar la deuda de la región y que la mayor parte de las nuevas corrientes de capital deben consistir en donaciones. En su reunión en Toronto, celebrada en junio de 1988, el Grupo de los Siete países industrializados más importantes aprobó una serie de opciones para atender el problema de la deuda de los países deudores más pobres, entre las que se contaban la condonación de parte de la deuda, la concesión de plazos más prolongados para su amortización y la reducción de las tasas de interés. Incluso, el Club de París afinó más este enfoque, pero el servicio de la deuda sigue constituyendo una pesada carga.

Los problemas económicos y la incertidumbre financiera que reinan en el mundo se deben a una secuencia de hechos. Uno de ellos fue el efecto inflacionario del financiamiento de la guerra de Vietnam y el carácter ambicioso de los programas de gastos internos de Estados Unidos, que socavaron el valor del dólar, haciéndole perder su estabilidad y su capacidad de sustentar el sistema monetario internacional. Al perder vigencia los acuerdos de Bretton Woods y llegar a su fin el régimen de tipos fijos de cambio, desaparecieron las normas que obligaban a los países a efectuar ajustes para contrarrestar los desequilibrios de sus balanzas de pagos; las perturbaciones subsecuentes contribuyeron a desatar la inflación en la mayoría de los países.

Otros hechos fueron las dos crisis de los precios del petróleo en 1973-1974 y 1979-1980. En esos lapsos las cotizaciones fueron 20 veces superiores a las que prevalecieron en los sesenta, lo que repercutió violentamente en todo el sistema financiero internacional. Los enormes superávit en cuenta corriente acumulados por varios países exportadores de petróleo tuvieron su contrapartida en los déficit de los países importadores del hidrocarburo.

Una parte considerable de ese superávit se depositó a corto plazo en los bancos comerciales de Occidente, que a su vez los transformaron en créditos a mediano y largo plazos, principalmente para los países importadores de petróleo. Este procedimiento, denominado recirculación de petrodólares, significó en la realidad una conversión muy riesgosa de las obligaciones a corto plazo de los bancos comerciales en préstamos a largo plazo. La predisposición a tomar préstamos se vio estimulada por tasas negativas de interés real, que fue uno de los efectos del aumento de la inflación.

Empero, los bancos comerciales, los bancos centrales y los gobiernos no comprendieron, o al menos subestimaron, el peligro intrínseco de la renovación de créditos. No sólo los nuevos métodos de creación de crédito estuvieron prácticamente exentos de fiscalización, sino que, además, debido a la abundancia de liquidez, se dio prioridad al financiamiento ininterrumpido, sin que el FMI, el Banco Mundial y los gobiernos acreedores ejercieran una supervisión adecuada, de carácter regulatorio, para que los países deudores introdujeran los ajustes indispensables.

Los países deudores debieron tomar medidas para mejorar la aplicación de sus políticas, reducir el consumo de petróleo, modificar la relación entre sus políticas fiscal y monetaria, recortar los gastos militares y de empresas estatales y proyectos antieconómicos establecidos con fines de prestigio, luchar contra la corrupción, contener la fuga de capitales y hacer frente a los problemas de pobreza generalizada. Sin embargo, la aplicación de estos ajustes indispensables distó de ser completa. Además, el medio externo evolucionó desfavorablemente, al registrarse un crecimiento más lento en los países industrializados, altas tasas de interés y empeoramiento de los términos de intercambio de los países deudores.

Como resultado de las necesidades de fondos para importantes proyectos de desarrollo en los países superavitarios productores de petróleo, la corriente de petrodólares hacia el sistema bancario de los países industrializados se interrumpió a comienzos del decenio de los ochenta. Al mismo tiempo, las nuevas políticas macroeconómicas adoptadas por Estados Unidos provocaron que se elevaran las tasas de interés real. La crisis de la deuda se desencadenó en agosto de 1982 cuando México no pudo atender el servicio de su deuda externa.

Los bancos comerciales habían acumulado un volumen enorme de préstamos a los países menos desarrollados. En 1982, por ejemplo, los créditos externos de los bancos comerciales más importantes de Estados Unidos concedidos a los países en desarrollo ascendían a una cifra equivalente al doble de su base de capital. Los bancos acreedores tuvieron que reconocer que gran parte de esos préstamos no se reembolsaría o que, de hacerse, no sería en los plazos acordados. A comienzos de la crisis incluso los bancos comerciales más importantes encararon la muy real posibilidad de un colapso.

Desde el inicio de la crisis de la deuda, en 1982, los bancos acreedores de Estados Unidos han podido reconstituir parte de su base de capital. Durante los cuatro años comprendidos entre 1984 y 1988, el valor total de los créditos de los bancos comerciales estadounidenses a América Latina se redujo de 106 000 millones a 95 000 millones de dólares. Se estima que el valor medio

6. África al Sur del Sáhara incluye a todos los países africanos con excepción de Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Túnez y Sudáfrica.

de sus provisiones para la deuda de los países en desarrollo asciende en la actualidad a 30% de ésta.

Los riesgos acumulados por los bancos comerciales de Japón en países menos desarrollados no son tan graves. En 1987, la apreciación del yen había reducido a la mitad el valor en moneda nacional de sus préstamos pendientes en dólares de Estados Unidos. Para la mayoría de los bancos japoneses, las deudas de los países latinoamericanos representan sólo 1% del valor total de su activo.

Un grave problema de los bancos comerciales de Estados Unidos y Japón es que sus leyes fiscales no fomentan la creación de provisiones suficientes para protegerse del posible incumplimiento de pago por préstamos.

La política de creación de provisiones es mucho más favorable para los bancos comerciales de Europa, donde se permite la deducción fiscal de las pérdidas; tal es el caso de Francia y la RFA. De ahí que en estos países el nivel de las provisiones sea relativamente elevado (50 y 45 por ciento, respectivamente).

Empero, las autoridades monetarias y el sistema bancario deben hacer frente a nuevos problemas, algunos de los cuales se relacionan con los antecedentes de la crisis de la deuda. Las corrientes financieras internacionales ahora superan con creces los flujos comerciales internacionales y dominan los mercados de divisas. Debido a la gran inestabilidad de los tipos de cambio, estos mercados financieros ampliados podrían alterar las corrientes financieras en cualquier momento, lo que posiblemente provocaría fuertes tensiones e incluso desorganizaría el sistema financiero mundial. El derrumbe del mercado de valores en 1987 puso de manifiesto esos riesgos.

La reacción inmediata que en todo el mundo tuvieron los acontecimientos ocurridos en Wall Street en octubre de 1987 demostró con claridad plena que, aunque hay un solo mercado financiero mundial, el alcance de las reglamentaciones todavía está circunscrito en su mayor parte por las fronteras nacionales. Nunca ha sido más evidente la necesidad de una estrecha colaboración y coordinación entre las autoridades nacionales de fiscalización; además, la expansión de la banca extraterritorial ha causado incertidumbre acerca del prestamista de última instancia. En fechas recientes los principales bancos centrales han reconocido, al menos en parte, estos riesgos.

La expansión de las operaciones especulativas ha alcanzado a los mercados industriales. La adquisición de empresas mediante endeudamiento, que se originó en Estados Unidos, se ha extendido a muchos países. Consistente sobre todo en el financiamiento con préstamos de bancos comerciales y con las denominadas obligaciones de alto riesgo,[7] este tipo de adquisición se ha hecho cada vez más atrayente debido a la posibilidad, en algunos países, de deducir los impuestos sobre los pagos de intereses de la deuda (los pagos de dividendos no son deducibles).

Puesto que los países menos desarrollados siguen tropezando con dificultades para atender el servicio de su deuda, los bancos comerciales se resisten cada vez más a otorgar nuevos préstamos. La concesión voluntaria de éstos ha cesado casi por completo. En los últimos años los bancos comerciales que los han otorgado lo han hecho, sobre todo, para asegurarse el pago de los intereses sobre los débitos pendientes.

Algunos bancos han vendido préstamos con descuento de países menos desarrollados a otros bancos o a terceras partes. Por ejemplo, en el primer trimestre de 1989 los préstamos a Perú se descontaban 95%, los concedidos a Brasil, 66%, y los de Argentina, 80%. Los descuentos cada vez más grandes de esos préstamos en el mercado secundario reflejan crecientes dudas acerca del valor que puedan tener en última instancia.

En algunos acuerdos de reprogramación de la deuda, los bancos han canjeado préstamos descontados por otros activos. Se estima que en la actualidad tales reducciones voluntarias superan los 26 000 millones de dólares y abarcan a 15 importantes países deudores.[8] Por otra parte, el aumento del valor del marco alemán y el yen japonés se ha traducido en un importante incremento de su cotización respecto del dólar de Estados Unidos.

Los acuerdos de reprogramación de la deuda están vinculados, en la mayoría de los casos, con la concesión de nuevos créditos por instituciones financieras internacionales (el FMI, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, como los bancos Africano, Asiático e Interamericano de Desarrollo). En el pasado, las políticas de ajuste que requerían y fiscalizaban esas instituciones se concentraban fundamentalmente en medidas de reducción de los gastos públicos y del crecimiento de la oferta de dinero, reducción de las importaciones y devaluación de la moneda del país receptor de los créditos. Si bien es posible que esas políticas propiciaran el mejoramiento de la balanza de pagos, también pudieron ser demasiado estrictas como para estimular el crecimiento; en algunos casos, penalizaron a los sectores más pobres de la sociedad, causando asimismo agitación política y social.

Las instituciones financieras internacionales tienen un importante papel que desempeñar en el aumento de la corriente de fondos hacia los países en desarrollo. Aunque en el pasado sus aportaciones eran significativas, en los últimos años las transferencias netas del FMI y el BM se han hecho negativas. En la mayoría de los casos, su participación en acuerdos de reprogramación de la deuda es una de las condiciones para que los bancos comerciales concedan nuevos préstamos.

Las instituciones financieras internacionales están haciendo las veces de agente catalítico de las corrientes de capital procedentes de otras fuentes, mediante el suministro de fondos básicos para proyectos y préstamos para políticas[9] con el propósito de dar más eficiencia a la economía, aumentar las exportaciones y reducir las importaciones mediante su sustitución por productos de fabricación nacional. El BM ha aumentado recientemente el volumen de dichos préstamos.

7. Las obligaciones de alto riesgo son aquellas con elevadas tasas de interés que no se consideran aptas para inversiones institucionales y que, a veces, se emplean en operaciones de absorción y adquisición de sociedades comerciales.

8. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa de Marfil, Chile, Ecuador, Filipinas, México, Marruecos, Nigeria, Perú, Uruguay, Venezuela y Yugoslavia.

9. Los préstamos del BM para políticas se destinan al ajuste estructural de toda la economía o de un sector, como por ejemplo, el de la energía. Además de éstos el BM concede créditos para proyectos especiales. En los años 1985-1988 los préstamos para políticas representaron 32.3% de los otorgados por la institución a los países fuertemente endeudados (en comparación con 14.8% en 1982-1984).

El hecho de que el BM desee obtener sus fondos de los mercados internacionales de capital puede llevarlo a mostrarse menos dispuesto a correr riesgos en su política de concesión de préstamos. Sin embargo, el reciente aumento en los compromisos de capital de los países miembros de la OCDE debería permitirle desempeñar un papel de liderazgo incluso más importante en el suministro de capital y el respaldo de corrientes de fondos procedentes de otras fuentes.

La reducción del volumen de nuevos préstamos y el aumento de los pagos por concepto de intereses y amortización del principal significan que desde 1982 ha disminuido la transferencia neta de recursos a los países en desarrollo. En 1984, ésta fue negativa por primera vez. En 1988 la corriente neta de recursos de los países en desarrollo al mundo industrializado se estimaba en 43 000 millones de dólares; de 1984 a 1989 el valor total de dicha corriente ascendió a 140 000 millones de dólares. Sin embargo, durante el mismo período la deuda total de los países en desarrollo aumentó de 950 000 millones de dólares a 1 240 millones de dólares.

La crisis de la deuda de los países en desarrollo equivale de hecho a una serie de crisis crediticias nacionales o regionales estructuradas de manera diferente, que requieren enfoques distintos. Las deudas se han contraído de diferentes maneras: entre estados, entre el Estado y el sector privado, entre aquél e instituciones internacionales, entre entidades de este sector y entre el sector privado e instituciones internacionales. Según estimaciones del FMI, el total de la deuda externa de los países en desarrollo, que en 1982 ascendía a 850 000 millones de dólares, había aumentado en 1988 a 1 240 millones de dólares; de esta suma 1 040 millones de dólares eran a largo plazo, de los cuales 120 000 millones constituían la deuda sin garantía y 920 000 millones eran deuda garantizada por los gobiernos de los países deudores. De ésta, 490 000 millones se debían a acreedores oficiales, 350 000 millones a bancos comerciales y 80 000 millones a otros acreedores privados.

En el Plan Baker[10] de 1985 se reconoció la necesidad fundamental de adoptar políticas orientadas a impulsar el crecimiento de los países muy endeudados. En particular, se concentró en los programas de ajuste, en la reprogramación de la deuda a fin de ganar tiempo y en la concesión de nuevos préstamos de la banca privada para financiar las inversiones básicas.

Desde entonces se ha recurrido con mayor frecuencia a una serie de opciones basadas en el mercado, incluida la reducción voluntaria de la deuda, criterio que ha reiterado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady.[11]

Los países deudores han aplicado importantes programas de ajuste, que han ido acompañados de un cambio significativo en la filosofía económica que profesaban tradicionalmente. Los programas de reforma económica constituyen un proceso en constante evolución que debe robustecerse. Sin embargo, mientras los países deudores han hecho algunos progresos en ese sentido, la corriente de créditos privados no ha sido suficiente para sustentar su crecimiento interno. Además, en algunos casos los recientes aumentos de las tasas de interés han más que contrarrestado efectos importantes de las medidas de ajuste interno adoptadas por los países deudores.

Sigue siendo verdad, sin embargo, que aunque se ha avanzado en esa dirección la corriente de créditos privados no es suficiente para alcanzar el objetivo del crecimiento interno.

La fuga de capitales de los países en desarrollo refleja tanto sus escasas perspectivas de crecimiento como la falta de confianza en el conjunto de sus políticas económicas y fiscales. Debido a que los ciudadanos de esos países a menudo prefieren invertir su dinero en el extranjero, en especial en el mundo industrializado, el problema de la deuda se ha agudizado. Las escasas perspectivas de crecimiento también han acelerado el éxodo de personal capacitado.

En los países miembros de la OCDE, en los del CAME, en algunos de la OPEP y en muchas naciones en desarrollo los gastos militares siguen absorbiendo parte importante de los presupuestos nacionales. En 1987 los miembros de la OCDE dedicaron a fines militares la exorbitante suma de 470 000 millones de dólares y destinaron a la AOD sólo 40 000 millones. En otras palabras, la AOD de tales países representó sólo 8.8% de su presupuesto militar.

En el caso de los miembros de la OTAN, la AOD como porcentaje del presupuesto militar es incluso menor. No se dispone de datos precisos sobre los gastos militares de los países miembros del CAME.

En los países en desarrollo, los gastos militares son considerablemente mayores que la AOD que reciben. Se estima que del billón de dólares, aproximadamente, que se dedica por año a los gastos militares en todo el mundo, unos 200 000 millones corresponden a los países menos avanzados (incluso la República Popular China). Sin embargo, el total de AOD que reciben esos países asciende a sólo 48 000 millones de dólares, es decir, a una cuarta parte del valor de sus gastos militares.

La vía hacia adelante

El logro de un crecimiento suficiente y sostenible de la economía y el comercio mundiales es el elemento clave para crear un patrón acertado y eficiente para las corrientes financieras internacionales, en particular las dirigidas a los países en desarrollo.

No puede lograrse un crecimiento económico sostenible en

10. El Plan Baker, presentado en Seúl en octubre de 1985, por el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos instaba específicamente a que se aportaran recursos adicionales mediante préstamos de la banca comercial y de las instituciones financieras internacionales, por un valor de 29 000 millones de dólares, en un lapso de tres años, a condición de que los países prestatarios estuvieran "dispuestos a aplicar" políticas de crecimiento orientadas al mercado.

11. Este Plan, propuesto en Washington en marzo de 1989, expone el régimen básico en que se asentaría la labor encaminada a revitalizar la actual estrategia para resolver el problema de la deuda. Ese régimen comprendería medidas que permitirían negociar programas de reducción de la deuda o de su servicio, financiar planes específicos de reducción por parte de las instituciones financieras internacionales, un desembolso más oportuno del apoyo financiero, la reprogramación y restructuración de la deuda por conducto del Club de París, el aumento de las corrientes financieras, la atenuación de los obstáculos administrativos a la reducción de la deuda, las medidas para contener la fuga de capitales y el mejoramiento del entorno económico en los países deudores.

un ambiente monetario caracterizado por una fuerte inflación y por fluctuaciones muy irregulares de los tipos de cambio. Por tanto, el sistema monetario mundial del futuro debería ejercer una influencia disciplinaria en la gestión económica nacional, dentro de una estrecha cooperación internacional.

El Sistema Monetario Europeo (SME) ha demostrado que es posible lograr condiciones más estables. A la larga, el fortalecimiento y la ampliación de éste podrían facilitar la reforma del sistema monetario mundial. Otra medida para alcanzar la cooperación monetaria internacional podría consistir en invitar a la Unión Soviética, a China y a los países miembros del CAME a que participen en mayor grado y de manera más equitativa en los acuerdos monetarios internacionales.

El libre comercio beneficia considerablemente la economía mundial, pero está amenazado; es preciso movilizarse para defenderlo. Es fundamental adoptar medidas efectivas para luchar contra todas las formas de proteccionismo y abolir todas las barreras que se oponen al comercio, sobre todo en la esfera de los productos agrícolas, los movimientos de capital y los servicios.

Para alcanzar ese objetivo, los miembros de la OCDE, en particular, deberían actuar de manera concertada para reducir significativamente todas las barreras no arancelarias en los próximos cinco años. De esa forma se invertiría un proceso debido al cual, de 1981 a 1986, dichas barreras aumentaron 25% en Estados Unidos y 20% en la Comunidad Económica Europea.

Durante los próximos diez años los países miembros de la OCDE deberían adoptar las medidas necesarias para eliminar todas las barreras arancelarias y no arancelarias que aún subsisten.

Son de celebrar las declaraciones respecto al establecimiento de nuevas zonas de libre comercio, como el mercado único europeo, en que se propugna una mayor expansión del libre intercambio y se rechazan todas las barreras que puedan reducir el potencial de su crecimiento. Pero también debe resistirse a todas las tentaciones de transformar esas regiones en fortalezas económicas. Las nuevas zonas de libre comercio deberían eliminar las barreras no arancelarias impuestas a terceros países, en particular a los menos adelantados.

La estructura actual de las corrientes mundiales de capital no cambiará en tanto la economía más rica del mundo, Estados Unidos, continúe absorbiendo parte considerable de la formación de capital del mundo, y los dos países que más capital exportan, Japón y la RFA, sigan concentrando la mayor parte de sus enormes superávit en Estados Unidos.

Estados Unidos debería aplicar políticas encaminadas a reducir su abultado déficit fiscal y de cuenta corriente y a recuperar su condición de exportador neto de capital para mediados del decenio de los noventa.

Para aumentar la tasa de ahorro y al mismo tiempo fortalecer la formación de capital, Estados Unidos debería restablecer el equilibrio fiscal en un plazo de cuatro años reduciendo los gastos y, si fuera necesario, aumentando los impuestos.

Estados Unidos debería disminuir los incentivos a la creación de deudas derogando las disposiciones fiscales que impulsan el financiamiento más mediante deudas que por suscripción de capital.

Es indispensable que Japón y la RFA adopten medidas enérgicas para reducir sus actuales superávit de cuenta corriente en relación con el resto del mundo y basar su crecimiento económico en la demanda interna. (En el caso de Japón, este proceso ya se ha iniciado.) Ambos países deberían reducir sus actuales superávit de cuenta corriente a 1% del PNB e implantar diversas medidas presupuestarias, tales como derogar el trato fiscal preferencial al ahorro privado y estimular el gasto público destinado a la creación de infraestructura.

Japón debería aumentar considerablemente su AOD, de una cifra inferior a la media de la OCDE a 1% de su PNB.

La Unión Soviética y los otros países del CAME, así como la República Popular China, deberían adoptar medidas para integrar de lleno sus economías a la mundial. Para estimular ese proceso se les debería recibir como participantes con plenos derechos en organizaciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial y el GATT, siempre y cuando asumieran plenamente las obligaciones que supone la calidad de miembro. Habría que modificar las disposiciones sobre el derecho de voto en las instituciones de Bretton Woods para reconocer el aumento del número de miembros.

Es loable el propósito de los dirigentes chinos, soviéticos y de otros países miembros del CAME de promover la reforma estructural de sus economías. No debería desalentarse la posibilidad de concederles créditos privados en las condiciones imperantes en el mercado. Asimismo, la Unión Soviética debería comprometerse a ser un donante más importante de AOD.

Tras un nuevo período de guerra fría y de carrera de armamentos, Estados Unidos, la Unión Soviética y sus aliados parecen ahora dispuestos a reducir el enfrentamiento político y a negociar tratados de desarme de equilibrio mutuo. La normalización de las relaciones entre las superpotencias ya ha permitido alcanzar soluciones negociadas de algunos conflictos regionales. Surge ahora la posibilidad de lograr una estructura concertada de las relaciones entre el Este y el Oeste que, al reducir la tensión política y el peso de la carga militar, facilitaría los esfuerzos tendientes a:

a] resolver el problema presupuestario de Estados Unidos;

b] mejorar la situación de la economía en la Unión Soviética y los países de Europa oriental;

c] aumentar la corriente de fondos hacia los países en desarrollo;

d] crear condiciones favorables al crecimiento económico mundial, y

e] proporcionar fondos para hacer frente a los problemas ambientales.

Los países en desarrollo deberían dar prioridad a la creación de un clima económico favorable. Para lograrlo, deberían tratar de reducir las tasas de inflación, abrir los mercados en la medida en que lo permitieran las circunstancias, exigir que las empresas paraestatales se ajustaran a las normas del mercado, hacer frente a los problemas de quienes tienen menos ingresos, reducir las tasas de crecimiento demográfico, evitar el deterioro del ambiente, mejorar la legislación sobre la propiedad, establecer sistemas tributarios equitativos, reducir la intervención de los gobiernos

en la gestión microeconómica, etc. El clima económico será el factor fundamental para que los bancos comerciales concedan nuevos préstamos o no lo hagan y que se atraigan inversiones extranjeras directas.

El establecimiento de un clima económico más favorable, sumado tal vez a medidas legales de amnistía, reduciría la fuga de capitales y facilitaría el retorno de éstos del extranjero.

En definitiva, el crecimiento autosostenido de todos los países en desarrollo dependerá de sus propios esfuerzos y políticas para aumentar el ahorro y la eficiencia en la producción. Al mismo tiempo, muchos países en los que se concentra gran parte de la población del mundo están tan sumidos en la pobreza y carecen hasta tal punto de recursos que es urgente proporcionarles cantidades considerables de AOD para impulsar y sostener el crecimiento. Para otorgar esa asistencia deberían exigirse la observancia de normas estrictas de eficiencia y un rendimiento efectivo del capital.

Congruente con el cumplimiento de esos requisitos, en los próximos cinco años debería duplicarse el monto total de AOD que prestan los países industrializados.

En la distribución de los fondos de AOD debería otorgarse prioridad a los países menos adelantados y al socorro para casos de desastres.

Al mismo tiempo, la preservación del ambiente exigirá enormes sumas de capital. El efecto de invernadero obligará a todos los estados a reducir la emisión de gases de dióxido de carbono, causada principalmente por la producción de energía mediante el uso de hidrocarburos. Esta obligación no puede ni debe imponer una nueva carga a los países en desarrollo, sino que debería recaer en los industrializados, que han sido los principales culpables del problema.

La opinión pública, los parlamentos y los gobiernos de las naciones donantes consideran difícil, desde el punto de vista político, aumentar la ayuda para el desarrollo, imponer nuevos tributos o asignar fondos concretos dentro de los procesos presupuestarios ordinarios. Sin embargo, para lograr el tan postergado aumento de los recursos destinados a la AOD, en todos los países donantes deberían preverse y aplicarse mecanismos automáticos con esos fines. Por ejemplo, un proceso de ese tipo que iniciara con 0.5% del PNB en 1990 y aumentase anualmente 0.04% alcanzaría 0.7% en 1995 y produciría más de 100 000 millones de dólares anuales.

Las naciones donantes y las instituciones financieras internacionales deberían dar especial consideración a los países que:

a] hicieran hincapié en programas de reducción de la pobreza;

b] destinaran menos de 2% del PNB a gastos militares;

c] aplicaran o adoptaran medidas encaminadas a lograr políticas eficientes de planeación demográfica para hacer frente al problema del crecimiento de la población, o

d] implantaran políticas encaminadas a preservar el ambiente.

No hay región en el mundo en que los problemas del desarrollo sean tan abrumadores y apremiantes como en el África al Sur del Sáhara. Ello es cierto en cuanto al crecimiento de la población, al deterioro del ambiente y al descenso de la producción agrícola y de alimentos; aún más, es particularmente grave la escasez de recursos humanos capacitados y calificados.

En última instancia, la posibilidad de remediar la situación de esa región depende de los propios africanos. Sin embargo, al no haber suficientes directivos de alto nivel y capacidad técnica, profesional y de gestión, el África al Sur del Sáhara no puede hacer frente a esa tarea. Los países donantes y los organismos multilaterales deberían procurar muy especialmente suministrar fondos destinados a la formación y al mejoramiento cualitativo de los dirigentes africanos en esas esferas y otros campos conexos.

Concretamente, los países miembros de la OCDE —con una participación muy considerable de Japón— deberían establecer un fondo de dotación de 1 000 millones de dólares, administrado por el Banco Africano de Desarrollo. Los ingresos del fondo deberían utilizarse para contribuir a formar dirigentes, a fin de crear en el África al Sur del Sáhara la infraestructura institucional indispensable para lograr y sostener la estabilidad política y el crecimiento económico.

Además, la corriente de financiamiento externo hacia la región debería aumentarse por encima de los niveles previstos mediante la concesión de asistencia destinada específicamente a reducir el problema de la deuda y ampliando la AOD.

A fin de alentar la cooperación multinacional, la inversión también debería encauzarse a proyectos y programas regionales y subregionales.

Debería otorgarse asistencia especial para hacer frente al problema de las drogas, incluida la erradicación de los cultivos de las que se obtienen. Los países donantes deberían suministrar financiamiento a largo plazo para apoyar los esfuerzos de los gobiernos interesados en sustituir la producción actual por cultivos alimentarios o agroindustriales y en satisfacer las necesidades sociales básicas de los participantes en el proceso de transición.

Ahora bien, los países en desarrollo que producen los cultivos a partir de los cuales se fabrican las drogas para su distribución no pueden hacer frente por sí solos a un problema que afecta a toda la humanidad. En los países consumidores recae la enorme responsabilidad no sólo de reducir la demanda de drogas, sino además de sobrellevar el costo financiero, social y político de la lucha contra el consumo y el tráfico internacional de drogas. Todos los gobiernos deberían reconocer el carácter universal del problema y adoptar medidas colectivas inmediatas. Para ello, debería llegarse a un acuerdo internacional en que participaran todos los países involucrados en la producción, la difusión, el tráfico y el uso de estupefacientes.

La complejidad del problema de la deuda, así como su diversidad estructural, exige soluciones urgentes a largo plazo adaptadas a cada caso concreto. Para ello es necesario adoptar enfoques institucionales innovadores.

El problema de los países con grandes deudas exige atención prioritaria y la adopción de medidas urgentes. Los acontecimientos recientes ponen de manifiesto la necesidad imperiosa de que se adopten nuevas iniciativas respecto tanto de la restructuración de la deuda existente como del nuevo financiamiento para hacer frente a las necesidades futuras. No sólo se está deteriorando la

situación actual, sino que, además, si no se prevén medidas positivas, se amenazan seriamente las perspectivas de un mayor crecimiento económico y una mayor estabilidad financiera. La propia democracia está en peligro de ser destruida.

En el Plan Brady se reconoce oficialmente que los bancos comerciales, directa o indirectamente, deben aceptar una reducción del valor de sus préstamos a los países en desarrollo. También se acepta, por primera vez, la necesidad de que las instituciones de Bretton Woods apoyen la reducción de la deuda. Es preciso adoptar medidas detalladas en las que se combinen de alguna forma la reducción de la deuda y de los intereses, y se conceda un respaldo oficial mediante la concesión de nuevos fondos y de garantías parciales de las deudas refinanciadas y reducidas vigentes con los bancos comerciales.

En este contexto, es fundamental reconocer que, a fin de que haya una cooperación efectiva entre los bancos comerciales, las instituciones internacionales, los gobiernos deudores y los acreedores, es imprescindible la adopción de medidas simultáneas. Ello no se logrará sin un financiamiento suficiente y una dirección enérgica y centralizada de los jefes de las dos instituciones de Bretton Woods. El FMI y el BM tendrán que colaborar estrechamente para estimular actividades conjuntas de evaluación y examen.

Este proceso podría concretarse de la manera más eficiente mediante el establecimiento de un nuevo servicio financiero con los auspicios del BM y el FMI, que tendría por objeto movilizar recursos en un monto considerablemente superior a las corrientes que ahora reciben los países en desarrollo. Tales recursos, junto con los aportados por el FMI y el BM, provendrían de las contribuciones voluntarias de los países de la OCDE; Japón sería el principal país contribuyente.

A su debido tiempo, acaso convendría dotar a ese servicio financiero de una estructura institucional, a fin de que pudiera obtener capital y contraer empréstitos en los mercados. Podría constituirse inmediatamente en un elemento directriz de las negociaciones y de la coordinación encaminadas a lograr un alivio efectivo de la deuda, consonante con el desarrollo.

Dada la magnitud de las necesidades financieras de los países muy endeudados, se podría inducir a los bancos comerciales que desearan mantener una presencia activa en ellos a que aportaran mayor caudal de financiamiento para el comercio o la inversión. En algunos casos sería aconsejable el cofinanciamiento con el BM y los bancos regionales de desarrollo. A los comerciales, en especial a los que no convengan en arreglos voluntarios de alivio de la deuda ni aporten cuantías importantes de nuevos recursos, se les debería pedir que aceptaran monedas nacionales en pago de parte de los intereses que se les adeudan, con lo cual se generarían fondos para la inversión local.

Esos programas financieros coordinados debieran sustentarse en programas económicos plurianuales, sujetos a la supervisión general del BM y del FMI.

Habida cuenta de las graves consecuencias políticas y sociales que se derivan de los programas nacionales de ajuste a que se condicionarán las aportaciones de nuevas corrientes financieras, convendría que las instituciones multilaterales examinaran la posibilidad de establecer un grupo asesor para analizar los criterios generales para determinar esa condicionalidad.

Ya que Japón ha desempeñado, y debiera continuar desempeñando, un papel cada vez más destacado en el financiamiento del FMI y el BM y, en particular, de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), a sus mayores contribuciones debiera corresponder un número suficiente de derechos de voto.

Las reducciones de la deuda con la banca comercial no constituirán una panacea. Si se conviene en ellas de manera voluntaria, es muy probable que el alivio resulte insuficiente en las condiciones imperantes. Por otra parte, si esas reducciones se impusieran unilateralmente, pondrían en grave peligro la solvencia futura de los países fuertemente endeudados. Por tanto, persiste la necesidad apremiante de atender las necesidades financieras externas de esos países. La Secretaría de la UNCTAD estima que la cuantía de recursos externos adicionales que se necesitaría para lograr un crecimiento per cápita de 3% en los países fuertemente endeudados será de aproximadamente 16 000 millones de dólares por año en el próximo lustro; una disminución de 30% de la deuda insoluta con los acreedores privados reduciría en esa proporción los pagos por concepto de intereses.[12]

Los gobiernos de los países de la OCDE deberían fomentar la inversión privada en los países en desarrollo y el otorgamiento de préstamos a esos países por conducto de diversos apoyos como las garantías oficiales contra riesgos políticos y las reformas de las disposiciones reglamentarias, los regímenes de contabilidad y el código tributario, pues de ese modo se facilitaría la acumulación de reservas contra posibles préstamos incobrables.

Debe reconocerse el nexo entre comercio, deuda y desarrollo. Para que se reanude el crecimiento económico y haya un progreso importante en la solución del problema de la deuda es menester una expansión considerable de las exportaciones tradicionales y no tradicionales de los países fuertemente endeudados. Junto con el fortalecimiento de las estrategias orientadas a la exportación que ya han adoptado algunos países en desarrollo, la creación de un régimen de comercio internacional más abierto y favorable (incluida la reducción de las barreras no arancelarias, las cuotas, la certificación de origen y la ampliación de regímenes preferenciales específicos) ofrecerá posibilidades para atender el servicio de la deuda.

Los países miembros de la OPEP y otros países exportadores de petróleo debieran compartir la responsabilidad en el mantenimiento de un desarrollo económico internacional exento de crisis y soluciones de continuidad. Considerando los efectos de las dos crisis derivadas del aumento de los precios del petróleo en el decenio de 1970, esas naciones debieran comprometerse a suministrar petróleo a precios previsibles y estables. En general, el precio del petróleo debiera reflejar la necesidad de equilibrar la oferta y la demanda en el largo plazo.

La existencia de un medio nacional favorable ha sido un elemento fundamental en el surgimiento de las economías de industrialización reciente, que ha fomentado su transición de países en desarrollo a países industrializados. Por otra parte, es fácil demostrar que en otras naciones las graves restricciones económicas y las tasas negativas de crecimiento se han originado en políticas económicas desacertadas. Por ello, insistimos en que la responsabilidad fundamental en el progreso económico y social corresponde a los pueblos y dirigentes de cada país. □

12. Véase UNCTAD, *Trade and Development Report, 1988*, pp. 112 a 118.